TRABAJO DE INCORPORACIÓN A LA ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS y SOCIALES

Dr. ALBERTO ARTEAGA

Este ensayo constituye una modesta aportación al derecho procesal penal venezolano y se presenta como trabajo de incorporación a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, prestigiosa institución dedicada a cultivar el derecho y la ciencia política y a enaltecer los valores patrios que han exaltado esas disciplinas.

Sin duda alguna, constituye un reto y un compromiso haber sido elegido para ocupar un lugar en esta Ilustre Corporación a la que han pertenecido notables figuras del foro venezolano, profesores universitarios, magistrados y hombres dedicados al litigio, con el afán de contribuir a la resolución de problemas y conflictos, conforme a los criterios y a los dictámenes del derecho y de la ética.

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales, de la misma manera que la Universidad, referencias obligadas del pensamiento venezolano y centros de difusión de las ciencias jurídicas y políticas, deben irradiar esos conocimientos hacia la colectividad y, en particular, hacia los órganos encargados de aplicar las leyes y organizar la estructura normativa del Estado, con el propósito de fortalecer la vida institucional del país y contribuir a que los valores que sustentan el Estado de Derecho se afinquen y arraiguen en la sociedad venezolana.

En un país con gravísimas fallas institucionales y signado por el desprecio e irrespeto por las leyes –que se acatan pero no se cumplen- la Academia de Ciencias Políticas y Sociales debe difundir sus luces y no colocar la lámpara debajo de la mesa, sino en el lugar más destacado, de manera que, en verdad, ilumine, como lo propone el Evangelio, en manifestación de generosa contribución hacia un futuro más promisor, que no se construirá con las reservas de petróleo sino con los recursos morales de sus gentes, respetuosas del orden, de la ley, del derecho y de la justicia.

ELOGIO O PANEGÍRICO DEL DR. PEDRO J. LARA PEÑA

Me corresponde a mí el honor de sustituir en esta Corporación al Dr. Pedro José Lara Peña, recio hombre de leyes, prestigioso litigante, vertical ciudadano, que no se contentó con llenar formalmente un lugar en esta Academia y con desempeñar con destreza y conocimientos el cuestionado oficio del abogado, sino que hizo patente, ante propios y extraños, la firmeza de sus convicciones y sentó el precedente de la consecuencia con lo que se cree y profesa, adecuando su vida privada y profesional a las máximas exigencias del honeste vivere, unicuique suum tribuere y neminen laedere.

Pedro José Lara Peña, nació en San Sebastián de los Reyes, Distrito San Sebastián del Estado Aragua, el 29 de junio de 1913. Sus padres fueron Octavio Lara Casado y María Teresa Peña Martínez de Lara. Unido en matrimonio con la señora Leticia Fernández de Lara Peña, fundó con ella una hermosa familia, que ha cosechado el fruto de sus hijos, María Margarita, Leticia, Pedro José, Isabel, María Silvia, Juan Felipe, Octavio, María Teresa y María Claudia.

Cursó sus estudios en el Colegio de San Francisco de Sales en Sarría, donde hizo también sus estudios de educación media, habiendo obtenido el título de bachiller en el mes de junio del año 1932.

Ingresó en la Universidad Central de Venezuela, en octubre de 1932, para cursar la carrera de Ciencias Políticas; y concluyó sus estudios en el año 1938, habiendo obtenido en el curso de su escolaridad brillantes calificaciones. A los fines de su título de Doctor en Ciencias Políticas, presentó una Tesis denominada "HISTORIAS DE LÍMITES DE VENEZUELA CON COLOMBIA Y BRASIL ", que mereció ser premiada por la Universidad Central con veredicto laudatorio y mención de publicación.

El Dr. Pedro José Lara Peña en los años finales de sus estudios universitarios y en los primeros de graduado, desempeñó el cargo de Juez de la Parroquia La Vega.

En el año 1938, fue elegido miembro de la Asamblea Legislativa del Estado Aragua; luego Vice-Presidente de esa Asamblea; y con posterioridad, ejerció la Presidencia de esa institución.

En el año 1939 fue elegido Diputado Principal por el Estado Aragua ante el Congreso Nacional. Desarrollo allí una destacada labor parlamentaria y llegó a ser Vice-Presidente de la Cámara de Diputados, por lo tanto, también Vice-Presidente del Congreso Nacional.

Como recuerdo de sus luchas parlamentarias. Cabe mencionar la intervención destacada en la discusión del Código Civil del año 1942, en cuya redacción había tomado parte, pues fue miembro del equipo de trabajo del Dr. Luis 1. Bastidas y de la Comisión redactora del Proyecto de Código, no como miembro de ella, sino como abogado adjunto.

Siendo estudiante desempeñó también el cargo de Secretario de la Comisión de Comercio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y, luego, pasó a ser Consultor Jurídico en el Ministerio de Relaciones Interiores, cargo que le permitió formar parte de varias comisiones redactoras de proyectos de leyes, además de la del Código Civil, como se ha dicho.

El 13 de octubre de 1950, fue designado Ministro, desempeñando la Cartera de Agricultura y Cría, hasta el 7 de octubre de 1952. Desde entonces y hasta su muerte, ejerció su profesión de abogado, siendo consultor de varias e importantes empresas.

El 26 de julio de 1978, fue recibido en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, como individuo de número de esta corporación científica, donde ocupaba el Sillón N°7.

El Dr. Pedro José Lara Peña falleció en Caracas el 21 de junio del año 2001.

Entre sus trabajos publicados, cabe hacer referencia a los siguientes:

Historia de Límites de Venezuela, Colombia y Brasil; Consideraciones para un mejor aprovechamiento de nuestra ganadería de carne; Historia de Límites de Venezuela con Guyana: Controversia sobre el Protocolo de Puerto Espar1a: Posibilidades de accionar jurídicamente ante un Tribunal Internacional los Derechos de Venezuela para obtener la revisión del fallo; Venezuela y el Pacto Andino; Polémica con Domingo Alberto Rangel sobre el Pacto Andino; Disolución y Liquidación de Sociedades Civiles en el Derecho Venezolano; La Reforma de la Iglesia y un Texto del Padre Faber; El Patrimonio gravable con el impuesto sobre sucesiones en el caso de acciones no inscritas en las bolsas de comercio; Esquema de acervo de títulos jurídicos de propiedad soberana de la nación venezolana sobre la integridad de las aguas del Golfo que lleva su nombre; Controversia sobre la Guyana Esequiba; Tesis excluyente de soberanía colombiana en el Golfo de Venezuela; El Golfo de Venezuela.

Estos datos curriculares del Dr. Lara Peña apenas constituyen unos trazos sobre su vida, de su obra y de su trayectoria profesional pero, por supuesto, no reflejan lo más importante de un hombre: su testimonio de vida y los rasgos de su personalidad, por encima del simple enunciado de los cargos desempeñados o de los méritos académicos acumulados.

Yo no conocí personalmente al Dr. Pedro José Lara Peña, pero relacioné siempre la sonoridad de su nombre con su reciedumbre, con la firmeza de carácter, con la verticalidad de su conducta, con la consecuencia y armonía entre lo que se predica y lo que se practica.

Pedro José Lara Peña fue un hombre de una sola pieza, combativo, polémico, fiel a sus principios y convencido de que en la vida el camino se hace con las piedras de la consecuencia y de la fidelidad a los valores supremos del hombre; con la constancia; con un espíritu de lucha a toda prueba, que no admite claudicar ante los espejismos del halago del dinero o ante los tentadores encantos del poder; y, sobre todo, con la fe del hombre creyente que pone su confianza en Dios, sin dejar de trabajar un solo día.

Consecuente hasta el final con sus posiciones, de él cabe decir como dijo San Pablo, que "*combatió el buen combate, terminó su carrera, guardó la fe y se hizo acreedor a la corona de la justicia que otorga el Justo Juez*" (2 Timoteo, 7-8).

III. EL TEMA DE LA LIBERTAD Y SUS RESTRICCIONES EL PROCESO PÉNAL

El objeto de este trabajo es un estudio sobre la libertad y sus restricciones en el nuevo sistema procesal penal, instaurado en Venezuela, a partir de la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, ello de julio de 1999, ordenamiento que ya ha sido reformado en dos oportunidades, el 25 de agosto de 2000 y el 14 de noviembre de 2001.

Específicamente, me he propuesto dejar en claro la importancia del derecho a ser juzgado en libertad, en armonía con la presunción de inocencia de la que goza toda persona, precisando las específicas restricciones a este derecho que se concretan en las denominadas medidas de coerción personal, entre las cuales, la más grave y trascendente, es la privación judicial preventiva de la libertad.

El tema de la libertad y de sus limitaciones en el proceso penal, sin duda alguna, es crucial y de máxima relevancia, sobre todo, tomando en cuenta el desprecio por la libertad del régimen procesal que nos rigió, bajo el viejo *Código de Enjuiciamiento Criminal*, no tanto por la letra y el espíritu de su normativa, sino por la mentalidad de sus aplicadores que, en definitiva, convirtieron la regulación procedimental en un oscuro régimen de ajusticiamiento policial, avalado por el aparato jurisdiccional y centrado en el auto de detención, convertido en centro y razón de ser del "sistema", pena anticipada sin juicio, que convirtió a la justicia penal en instrumento del más grosero terrorismo judicial.

El *Código Orgánico Procesal Penal* devuelve a la libertad su verdadero rango de regla general en el proceso; establece como excepción sus restricciones; y se ubica, sobre todo, a raíz de la última reforma de 2001, en el justo medio de hacer posible las medidas cautelares de coerción personal y, en particular, la privación de libertad, solo en función estricta de las necesidades del proceso y del afianzamiento de la justicia, sin perder de vista la realidad venezolana, en un contexto de absoluto desprecio por la ley y de carencia de controles, que han hecho posible que la impunidad se haya enseñoreado y se haya perdido todo respeto por la llamada instancia penal, como instrumento imprescindible de control y de contención ante los hechos más graves que atentan contra el status ético-jurídico.

Aspiro, con toda sinceridad, a que estas páginas de sencillas reflexiones sobre materia tan importante, que ya en otra oportunidad traté en más breve artículo, apenas promulgado el COPP, en el año de 1998, se constituya en una eficaz contribución para que jueces, profesores, estudiantes de derecho y otras personas interesadas, tengan algunos materiales y puntos de vista para el debate abierto y productivo sobre el tema más polémico del nuevo proceso penal.

Caracas, en San Luis.

Mayo de 2002